Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **02210/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por  **un particular que no proporciono nombre**, en lo sucesivo el **Recurrente**, en contra de la respuesta de la **Universidad Autónoma del Estado de México**, en lo subsecuenteel **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. De la Solicitud de Información.**

Con fecha primero de abril de dos mil veinticuatro, el Recurrente presentó mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), solicitud de información registrada con el número de expediente **00432/UAEM/IP/2024**,mediante la cual solicitó información en el tenor siguiente:

*“En la página 9 de 40 del Tercer Informe Cuatrimestral del Órgano Interno de Control se afirma que hubo 11 expedientes por concepto de “violación normativa” De ello se solicita que se informe: a) Fundamento legal para definir el concepto violación normmativa b) Cuántos se refieren a violación normativa de la legislación universitaria c) Cuántos se refieren a violación normativa de legislación no universitaria d) Se desglose a qué normativa no universitaria se refiren los que cumplan el supuesto anterior“(Sic)*

Modalidad de entrega: **A través del SAIMEX**.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias que obran en el expediente electrónico, se observa que el veintidós de abril de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información manifestando lo siguiente:

*“Folio de la solicitud: 00432/UAEM/IP/2024*

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00432/UAEM/IP/2024, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150, 163, y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el numeral TREINTA Y OCHO de los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Información Pública, Acceso, Modificación, Sustitución, Rectificación o Supresión Parcial o Total de Datos Personales, así como los Recursos de Revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; hacemos de su conocimiento con base en la información proporcionada por el Órgano Interno de Control que se adjuntan los siguientes oficios: 1) OIC/SPH/162/2024 de la servidora pública habilitada del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México. 2) OIC/DI/939/2024 del Director de Investigación en funciones de Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es menester señalar que de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 162 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las unidades de transparencia deberán recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, con la información que las áreas competentes cuenten de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. Finalmente se hace de su conocimiento que de conformidad con los artículos 176, 177, 178 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el solicitante tiene derecho de presentar recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la respuesta.*

*ATENTAMENTE*

*M. EN D. HUGO EDGAR CHAPARRO CAMPOS” (sic)*

El Sujeto Obligado adjuntó a su respuesta los documentos denominados *“****OIC\_SPH\_162\_2024.pdf” y “OIC\_DI\_939\_2024.pdf”****,* los cuales no se reproducen por ser del conocimiento de las partes; no obstante, su contenido será motivo de análisis en el estudio correspondiente.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el Recurrente interpuso el presente recurso de revisión el día veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, el cual se registró con el expediente número **02210/INFOEM/IP/RR/2024**, manifestando lo siguiente:

**Acto Impugnado**

*“Autoridad declara inexistencia de información” (Sic)*

**Razones o Motivos de Inconformidad**

*“La autoridad, Director de Investigación, Andrés de Jesús Miranda, pone en su respuesta que la información no está clasificada en los términos solcitiados, sin embargo resulta inverosímil, pues conforme a la base normativa citada por él mismo la norma precisa que el Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: (...)XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables." Por lo tanto, resulta lógico que al ser una fracción muy general de una ley estatal, mínimamente tendría que tener una clasificación de qué leyes, reglamentos o disposiciones administrativas han resultado aplicables. Tampoco resulta verosímil que "no existe registro diferenciado como lo solicita el peticionario.", sin embargo tampoco aplica el principio de máxima publicidad para aportar la información requerida, considerando además que la persona peticionaria efectivamente aportó los datos de identificación necesarios para encontrar la información. Así mismo, resulta obscuro y poco transparente que la información no esté clasificada ni siquiera para la integración de un informe, como es el caso que motiva la presente solicitud. En ese mismo sentido, tampoco informa una razón suficiente para evitar entregar soportes documentales de su afirmación, pues se puede deducir, nuevamente, que para la integración de un informe, éste debe tener un soporte documental.” (Sic)*

**CUARTO. Del turno y admisión del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico en términos del numeral 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, al cual recayó acuerdo de admisión de fecha **treinta de abril de dos mil veinticuatro**, otorgándose en él un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de instrucción.**

Una vez abierta la etapa de instrucción, el Sujeto Obligado adjuntó su Informe Justificado adjuntando para tal efecto el documento electrónico denominado *“rr2210-24\_13-05-2024-174920.pdf”,* el cual fue puesto a la vista en fecha treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. Por su parte, el Recurrente no realizo manifestaciones o alegatos.

**SEXTO. Ampliación del término para resolver**

De las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que han transcurrido los términos de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que en fecha **trece de junio del año dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, que se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**SÉPTIMO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, se decretó el cierre de instrucción en fecha **dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro**, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia.**

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el Recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es menester señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento**

El Recurso de Revisión en estudio contiene los elementos normativos de validez exigidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecidos en el artículo 180 que enuncia:

*“Artículo 180. El recurso de revisión contendrá:*

1. *EL sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;*
2. *El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*
3. *El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

*IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

*V. El acto que se recurre;*

*VI. Las razones o motivos de inconformidad;*

*VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

*VIII. Firma del recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.*

***En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.” [Sic]***

Cabe señalar que **El Recurrente** ejerció de manera anónima su derecho de acceso a la información pública, sin embargo, no es motivo para desechar las solicitudes de acceso a la información pública conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que señala lo siguiente:

*“Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.”* ***[Sic]***

Robustece lo anterior se encuentra lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece lo siguiente:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6****°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*(…)*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.”* ***[Sic]***

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

*“****Artículo 5****.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.*

*(…)*

*transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. (…)”* ***[Sic]***

Por lo cual, de una interpretación sistemática, conforme y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que, **incluso, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima** o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad. En conclusión, se cubrieron los requisitos de procedencia y procedibilidad y conforme a las constancias que obran en el expediente.

**CUARTO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad que deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

Por lo anterior, es una facultad legal entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor y por ende objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto; presupuestos procesales de inicio o trámite de un proceso que dotan de seguridad jurídica las resoluciones, máxime que es una figura procesal adoptada en la ley de la materia[[1]](#footnote-1), la cual permite dilucidar alguna causal que impida el estudio y resolución, cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseerlo, sin estudiar el fondo del asunto.

Así las cosas, en la especie, no se actualiza ninguna causa de improcedencia de las referidas en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, encontrándose actualizados todos los presupuestos procesales para atender el fondo del asunto, en los términos del considerando posterior.

**QUINTO. Estudio y resolución del asunto.**

El análisis y resolución del presente recurso, se funda en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 8 de la Ley de Transparencia local.

Por tanto, es conveniente recordar que el hoy Recurrente requirió del Sujeto Obligado, de la actual administración, lo siguiente:

* Respecto al Tercer Informe Cuatrimestral del Órgano Interno de Control en la página 9 de 40, se afirma que hubo 11 expedientes por concepto de “violación normativa”, se solicita que se informe:

1. Fundamento legal para definir el concepto violación normativa.
2. Cuántos se refieren a violación normativa de la legislación universitaria.
3. Cuántos se refieren a violación normativa de legislación no universitaria.
4. Se desglose a qué normativa no universitaria se refieren los que cumplan el supuesto anterior.

Por lo que atento a la solicitud de información el Sujeto Obligado hizo entrega de los siguientes archivos electrónicos:

* ***OIC\_SPH\_162\_2024.pdf:*** Consta del oficio OIC/SPH/162/2024, remitido por la Servidora Pública Habilitada del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante el cual refiere que la solicitud fue turnada a la Dirección de Investigación, dando contestación a través del oficio OIC/DI/939/2024.
* ***OIC\_DI\_939\_2024.pdf:*** Contiene el oficio OIC/DI/939/2024, signado por el Director de Investigación en funciones de Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante el cual refiere lo siguiente:
* Con relación al inciso a), se informa que el concepto “violación a la normativa”, es aplicado por la autoridad para cuantificar y cualificar los asuntos cuya conducta se establece en el artículo 50, fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo tanto, el concepto “violación a la normativa” es una analogía para facilitar la comprensión e identificación de la conducta.
* Respecto a los incisos b), c) y d), se informa que no existe registro diferenciado como lo solicita el peticionario.

Ante la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el Recurrente consideró que su derecho a la información pública había sido conculcado, por lo que interpuso el recurso de revisión al rubro citado, señalando como acto impugnado *“Autoridad declara inexistencia de información”* y motivos de inconformidad que “*La autoridad, Director de Investigación, Andrés de Jesús Miranda, pone en su respuesta que la información no está clasificada en los términos solcitiados, sin embargo resulta inverosímil, pues conforme a la base normativa citada por él mismo la norma precisa que el Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes: (...)XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables." Por lo tanto, resulta lógico que al ser una fracción muy general de una ley estatal, mínimamente tendría que tener una clasificación de qué leyes, reglamentos o disposiciones administrativas han resultado aplicables. Tampoco resulta verosímil que "no existe registro diferenciado como lo solicita el peticionario.", sin embargo tampoco aplica el principio de máxima publicidad para aportar la información requerida, considerando además que la persona peticionaria efectivamente aportó los datos de identificación necesarios para encontrar la información. Así mismo, resulta obscuro y poco transparente que la información no esté clasificada ni siquiera para la integración de un informe, como es el caso que motiva la presente solicitud. En ese mismo sentido, tampoco informa una razón suficiente para evitar entregar soportes documentales de su afirmación, pues se puede deducir, nuevamente, que para la integración de un informe, éste debe tener un soporte documental.”,* en este sentido el Recurrente considero que el Sujeto Obligado refiera que no existe registro diferenciado como es solicitado, así como que la información no se encuentre clasificada para la integración de un informe, sin mencionar una razón suficiente para evitar entregar soportes documentales.

Consideraciones que se traducen en la entrega incompleta de la información, las cuales resultan fundadas para la interposición del recurso de revisión al encuadrar en la fracción V del artículo 179 de la Ley de Transparencia Local[[2]](#footnote-2).

Con motivo de la interposición del recurso de revisión, el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado, por medio del archivo electrónico *“****rr2210-24\_13-05-2024-174920.pdf****”*, consistente en el Informe Justificado remitido por el Director de Transparencia Universitaria, el oficio OIC/SPH/204/2024 remitido por la Servidora Pública Habilitada del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México y el oficio OIC/DI/1106/2024 remitido por el Director de Investigación del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, del que se observa el contenido siguiente:

* **rr2210-24\_13-05-2024-174920.pdf:** Consta de tres documentos, los cuales se describen a continuación:
* **Informe justificado:** Remitido por el Director de Transparencia Universitaria, mediante el cual medularmente solicita que se confirme la respuesta primigenia proporcionada por el Sujeto Obligado.
* **OIC/SPH/204/2024:** Remitido por la Servidora Pública Habilitada del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante el cual refiere que la solicitud de información fue turnada a la Dirección de Investigación, atendiendo el mismo a través del oficio OIC/DI/1106/2024, el cual se adjunta.
* **OIC/DI/1106/2024:**  Remitido por el Director de Investigación del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante el cual refiere que se advierte que el recurrente inobservó el requisito del recurso de revisión previsto en el artículo 180, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que sus razones o motivos son solo una afirmación ambigua y superficial, puesto que la respuesta proporcionada por la autoridad a través del oficio OIC/DI/939/2024 fue clara, toda vez que refiere que con relación al inciso a), se informa que el concepto “violación a la normativa” es aplicado por la autoridad para cuantificar y cualificar los asuntos cuya conducta se establece en el artículo 50, fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Por cuanto hace a los incisos b), c) y d) se informa que no existe registro diferenciado como lo solicita el peticionario.

Ahora bien, quedando establecido lo anterior, este Órgano Garante considera viable realizar el estudio en aras de establecer si la respuesta del Sujeto Obligado colma la pretensión del Recurrente, así como calificar los motivos de inconformidad del particular.

En este sentido, es pertinente enfatizar lo que, respecto al derecho de acceso a la información pública, refiere el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala:

**Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. **El derecho a la información será garantizado por el Estado.**

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

**I. Toda la información en posesión de** **cualquier autoridad**, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad **en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública** y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. **Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones**, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

**V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles**, **la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos** y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

[…]

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 5°, dispone en su parte conducente, lo siguiente:

**Artículo 5.** […]

El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.

Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.

Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas será protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y manejo de datos personales, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.

V. Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión de datos personales, así como los recursos de revisión derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos, a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la ley reglamentaria y el organismo autónomo garante en el ámbito de su competencia. Las resoluciones que correspondan a estos procedimientos se sistematizarán para favorecer su consulta.

VI. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos.

VII. La ley reglamentaria, determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o jurídicas colectivas.

Establecido lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo establecido en el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México a fin de advertir que el Órgano Interno de Control cuenta con las atribuciones para responder a la solicitud de información, conforme lo siguiente:

***REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL***

***EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.***

***CAPÍTULO SEGUNDO***

***DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PERSONAL Y***

***RECURSOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL***

***Artículo 6.*** *Para el ejercicio de las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control y el desahogo de los asuntos de su competencia, contará con la estructura orgánica conformada por las siguientes unidades administrativas:*

***I. Dirección de Investigación, a la que quedan adscritos:***

***a. Departamento de Investigación***

*b. Departamento de Control y Evolución de Declaraciones*

*II. Dirección de Substanciación y Proyección de Resoluciones, a la que quedan adscritos:*

*a. Departamento de Substanciación de Procedimientos Administrativos*

*b. Departamento de Proyección de Resoluciones*

*III. Dirección de Auditoría "A", a la que quedan adscritos:*

*a. Departamento de Auditoría "A I"*

*b. Departamento de Auditoría "A II"*

*IV. Dirección de Auditoría "B", a la que quedan adscritos:*

*a. Departamento de Auditoría "B I"*

*b. Departamento de Auditoría "B II"*

*V. Secretaría Técnica, a la que quedan adscritas:*

*a. Unidad de Apoyo Administrativo*

*b. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones*

*c. Unidad de Notificaciones*

***CAPÍTULO TERCERO***

***DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS DIRECCIONES***

***Artículo 13.*** *Corresponde a las personas titulares de las direcciones del Órgano*

*Interno de Control el ejercicio de las atribuciones siguientes:*

*I. Planear, programar, organizar, controlar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas a la dirección a su cargo;*

*II. Acordar con la persona titular del Órgano Interno de Control los asuntos que requieran su intervención;*

*III. Formular los informes, estudios, opiniones o dictámenes que les sean solicitados por la persona titular del Órgano Interno de Control;*

*IV. Formular y proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control el proyecto de presupuesto, así como el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Trabajo, y gestionar ante la Secretaría Técnica los recursos necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones;*

*V. Proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control cambios, licencias y remoción del personal de la dirección;*

*VI. Proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control las modificaciones administrativas, para lograr el mejor funcionamiento de la dirección a su cargo;*

*VII. Asesorar en el ámbito de su competencia a las servidoras públicas universitarias o los servidores públicos universitarios de la Universidad que lo soliciten;*

*VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones del Órgano Interno de Control, para el mejor desempeño de sus funciones;*

*IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, las que le sean señaladas por delegación o las que le correspondan por suplencia;*

*X. Expedir copias certificadas, cotejadas o simples de los documentos que obran en sus archivos;*

*XI. Planear, programar y ejecutar el Programa Anual de Trabajo autorizado por la persona titular del Órgano Interno de Control;*

*XII. Representar a la persona titular del Órgano Interno de Control en los asuntos que le solicite;*

*XIII. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios;*

*XIV. Atender las solicitudes de información, recursos y requerimientos en materia de Transparencia y Datos Personales correspondientes al Órgano Interno de Control;*

*XV. Coordinar las áreas a su cargo, para que cumplan con las obligaciones establecidas en las bases y lineamientos que expida el Comité Coordinador para el funcionamiento de la plataforma digital a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios;*

*XVI. Revisar, programar y enviar la documentación, cuando corresponda, al Archivo Universitario;*

*XVII. Llevar el control y gestión de la correspondencia de los asuntos a su cargo, y*

*XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le encomiende la persona titular del Órgano Interno de Control.*

***CAPÍTULO CUARTO***

***DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.***

***Artículo 15.*** *La Dirección de Investigación tendrá las siguientes atribuciones:*

*I. Observar las normas sobre formatos, contenido, instructivos y versiones públicas que expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional o Estatal Anticorrupción, en materia de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses;*

*II. Coordinar la recepción, registro y custodia de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las servidoras públicas universitarias o los servidores públicos universitarios, así como el proceso para su verificación a través de la evolución patrimonial;*

*III. Supervisar la incorporación y actualización de los datos en el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de las servidoras públicas universitarias o los servidores públicos universitarios. Previa verificación aleatoria, hacer constar que no existe anomalía o inconsistencia en las declaraciones registradas en el sistema;*

*IV. Verificar y autorizar el inicio de la investigación y las actuaciones que se deriven conforme a la Ley de Responsabilidades, tratándose de las servidoras públicas universitarias o los servidores públicos universitarios, así como de particulares, de conformidad con la competencia que al respecto otorga la misma ley;*

*V. Verificar que se hagan efectivas las medidas de apremio que se determinen, así como las medidas cautelares que se soliciten y sean decretadas por la autoridad substanciadora;*

*VI. Integrar, coordinar y evaluar el sistema de denuncias, que facilite la participación de la comunidad universitaria y la ciudadanía con relación al desempeño de las servidoras públicas universitarias o los servidores públicos universitarios, dentro del ámbito de competencia del Órgano Interno de Control;*

***VII. Llevar el registro y gestión de la correspondencia de los asuntos a su cargo y vigilar el seguimiento de las investigaciones por denuncias, de oficio y derivadas de auditorías, así como el seguimiento en la admisión, en su caso, de los informes de presunta responsabilidad administrativa, hasta su conclusión;***

*VIII. Verificar el desahogo de las audiencias o diligencias que procedan de conformidad a la legislación aplicable;*

*IX. Verificar que se realicen las notificaciones de los acuerdos, autos y determinaciones emitidas, en los términos que marca la legislación aplicable;*

***X. Recibir de las instancias de fiscalización, internas y externas, el expediente de auditoría y otras acciones de control que integren la documentación y comprobación necesarias de probables faltas administrativas que sean competencia del Órgano Interno de Control, para que, en funciones de autoridad investigadora, dé inicio al procedimiento de investigación y, en su caso, integre el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;***

*XI. Vigilar la recepción, trámite y resolución de los medios de impugnación y que se cumpla en tiempo y forma con los informes a las autoridades correspondientes;*

*XII. Supervisar las actividades y desahogo de los asuntos encomendados a las áreas adscritas a la dirección, y*

*XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.*

***SECCIÓN PRIMERA***

***DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN***

***Artículo 16. El Departamento de Investigación es la autoridad encargada del desahogo del procedimiento de investigación por faltas administrativas que sean competencia del Órgano Interno de Control****, en términos de lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Universitaria. Las actuaciones en la integración de la etapa de investigación y las derivadas de las mismas serán autorizadas por la persona titular de la Dirección de Investigación.*

***Artículo 18.*** *Son atribuciones del Departamento de Investigación, las siguientes:*

***I. Recibir las denuncias directas, de oficio, así como las derivadas de auditorías u otras acciones de control, con la documentación y comprobación necesaria en la que se adviertan probables faltas administrativas, no se hayan solventado las observaciones o por pliegos preventivos de observaciones;***

*II. Prevenir a la persona denunciante, cuando esta sea identificable para que aclare, rectifique o modifique, de ser necesario, el contenido de los hechos denunciados;*

*III. Realizar investigaciones fundadas y motivadas respecto de las conductas de su competencia que se presenten en contra de las servidoras públicas universitarias o los servidores públicos universitarios y de particulares que puedan constituir faltas administrativas;*

*IV. Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales;*

*V. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. No serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios;*

*VI. Ordenar la práctica de visitas de verificación, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, incluyendo acciones encubiertas y usuario simulado;*

*VII. Formular requerimientos justificados de información a los entes públicos y a las personas físicas o jurídico-colectivas que sean materia de la investigación, con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas;*

*VIII. Imponer las medidas de apremio establecidas en la Ley de Responsabilidades para hacer cumplir sus determinaciones;*

***IX. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que conforme a la Ley de Responsabilidades se presuman como faltas administrativas y, de ser el caso, calificarlas como graves o no graves;***

*X. Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo ante la autoridad substanciadora competente;*

*XI. Hacer del conocimiento a la persona titular del Órgano Interno de Control, a través de la persona titular de la Dirección de Investigación, los casos en que derivado de sus investigaciones se presuma la comisión de un delito;*

*XII. Coadyuvar en el procedimiento penal respectivo en los casos en que la persona titular del Órgano Interno de Control haya presentado denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o su similar en el ámbito federal;*

*XIII. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente, derivado de no encontrar elementos suficientes para presumir la existencia de la falta administrativa, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, al presentarse nuevos indicios o datos de prueba;*

*XIV. Conocer del recurso de inconformidad, que en su caso interponga la persona denunciante en contra de la calificación de la falta administrativa o por la determinación de abstenerse de no iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa, y correr traslado a la Sala Especializada, adjuntando el expediente integrado y el informe de justificación dentro del plazo señalado por la Ley de Responsabilidades;*

*XV. Impugnar, en su caso, la determinación de las autoridades substanciadoras o resolutora de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas, así como las del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con la naturaleza del asunto;*

*XVI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que se requieran;*

*XVII. Expedir las copias simples o cotejadas que sean solicitadas previamente;*

*XVIII. Obtener copia cotejada de los documentos originales que sean exhibidos;*

*XIX. Verificar que se practiquen las notificaciones de los acuerdos, autos y resoluciones a las partes, para los efectos procedentes, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;*

*XX. Organizar la documentación que se encuentre bajo su resguardo, para ser remitida al Archivo Universitario;*

*XXI. Cumplir con las obligaciones establecidas en las bases y lineamientos que expida el Comité Coordinador para el funcionamiento de la plataforma digital estatal a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y*

*XXII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le encomiende la dirección.*

Bajo ese contexto se puede apreciar, que de acuerdo al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Departamento de Investigación, dependiente del Órgano Interno de Control, es el área encargada de conocer sobre la información peticionada por el ahora Recurrente.

Por lo que en relación al punto **uno (1)** en el cual se solicita el fundamento legal para definir el concepto “violación normativa”, el Sujeto Obligado refiere que el concepto “violación a la normativa” es aplicado para cuantificar y cualificar los asuntos cuya conducta se establece en el artículo 50, fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que a la letra señala:

*“TÍTULO TERCERO*

*DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS*

*DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES*

*CAPÍTULO PRIMERO*

*DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES*

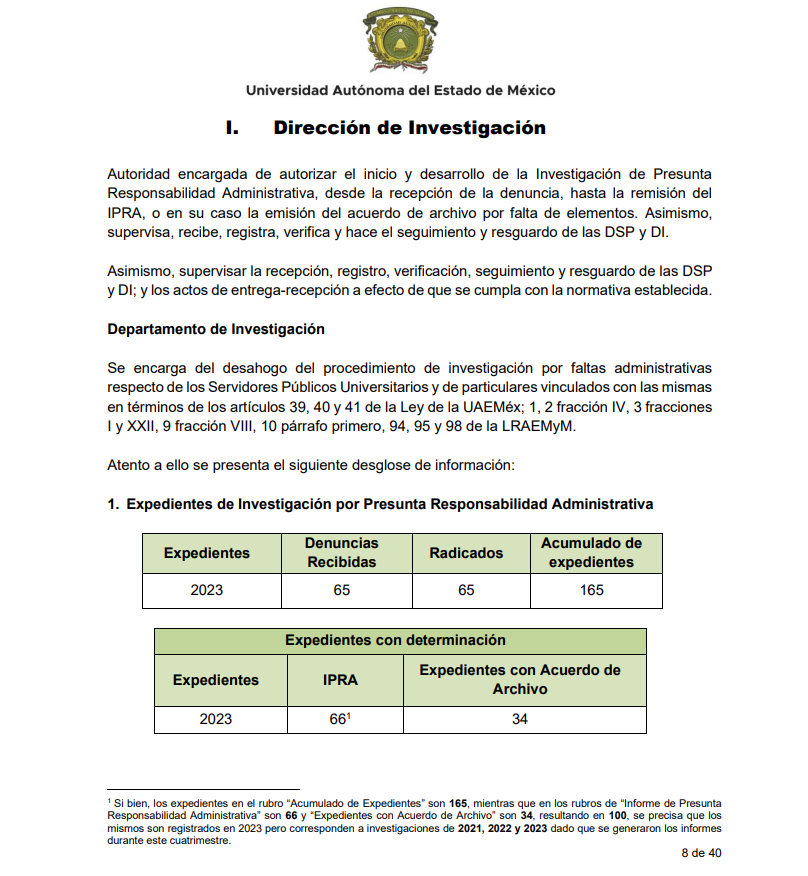
*DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS*

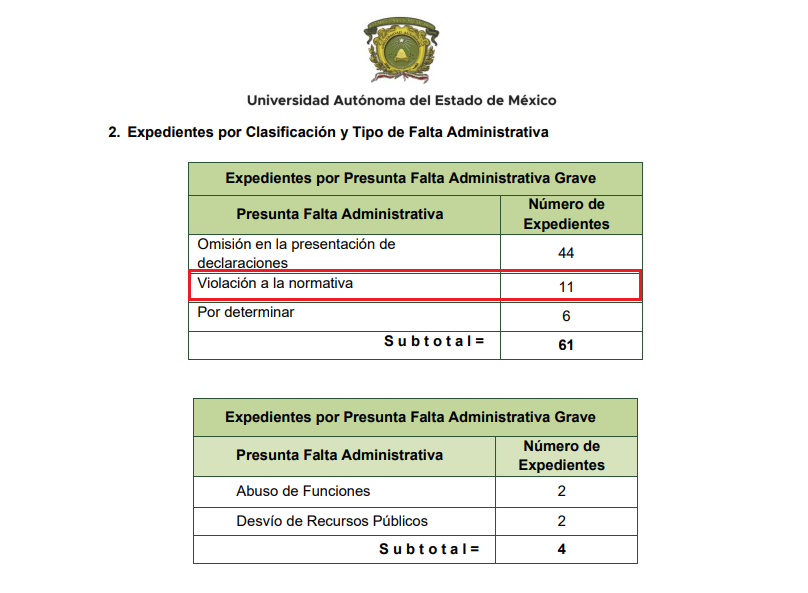
*Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes:*

*(…)*

*XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables.”*

Ahora bien, respecto a los puntos **2 (dos), 3 (tres) y 4 (cuatro)**, el Sujeto Obligado refirió que no existe registro diferenciado como lo solicita el peticionario, es así que resulta importante observar lo establecido en el Tercer Informe Cuatrimestral del Órgano Interno de Control, respecto a los 11 expedientes por concepto de “violación normativa”, que a la letra señala lo siguiente:





En ese sentido, dado que el área competente para generar, poseer o administrar la información solicitada manifestó que no existe fuente obligacional que constriña al Sujeto Obligado a generar las estadísticas requeridas por el particular,, se debe entender que se está frente a hechos negativos. Así, el Pleno de este Instituto ha sostenido que ante un hecho negativo resulta innecesaria una declaratoria de inexistencia en términos de los artículos 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, resultando aplicable la siguiente tesis:

***HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.***

*Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por qué invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.*

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la materia, el Sujeto Obligado sólo proporcionará la información que obra en sus archivos, lo que *a contrario sensu* significa que no está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos.

Asimismo, derivado del pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado, aun en sentido negativo, este Órgano Garante estima conveniente señalar que no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de la información proporcionada, ya que no existe precepto legal alguna en la Ley de la Materia que permita, vía recurso de revisión, que se pronuncie al respecto.

En consecuencia, al hacer del conocimiento del Recurrente en respuesta que no se generan, poseen o administran las estadísticas referidas en la solicitud de información, este Instituto estima que se colmó plenamente la pretensión del Recurrente.

Por lo argumentado en los párrafos que anteceden, este Instituto estima que el Sujeto Obligado colmó las pretensiones del Recurrente con su respuesta y, por tanto, los motivos de inconformidad planteados por el particular devienen infundados; por lo que es procedente confirmar la respuesta del Sujeto Obligado.

Así, con fundamento en el artículo 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **CONFIRMA** la respuesta a la solicitud de información pública **00432/UAEM/IP/2024** que ha sido materia del presente fallo, por lo que este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **CONFIRMA** la respuesta del Sujeto Obligadoa la solicitud de información **00432/UAEM/IP/2024** por resultar infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** **Notifíquese** la presente resolución mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado.

**TERCERO.** **Notifíquese** al Recurrentela presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y hágase de su conocimiento que en caso de que considere que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, conforme al artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JMV/CCR/

1. Estudio oficioso o a petición de parte que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines, sirviendo de sustento la tesis aislada XVI.1o.A.T.2 K visible en el Semanario Judicial de la Federación bajo el número de registro 2000365 cuyo rubro y texto estipula lo siguiente:

   ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos* [*73 y 74 de la Ley de Amparo*](about:blank) *con el artículo* [*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](about:blank)***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

   ***I****. …;*

   ***V****. La entrega de información incompleta;* [↑](#footnote-ref-2)